



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



RES-DAIP-129-2022
IMPROCEDENCIA

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA, DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA –DAIP- San Salvador, a las once horas con treinta minutos del día quince de diciembre del dos mil veintidós.

A sus antecedentes la Solicitud de Acceso a la Información Pública, **DAIP-129-2022**, recibida en este Departamento vía correo electrónico en fecha catorce de diciembre del presente año y recepcionada a las nueve horas con catorce minutos del día quince de diciembre del presente año, interpuesta por la ciudadana [REDACTED], quien requiere lo siguiente:

“LE SOLICITO UNA CONSTANCIA O CERTIFICACIÓN DE NO EXISTIR REGISTROS DE RESPONSABILIDAD.

PERIODO DE ADMINISTRACIÓN 1 DE MAYO 2015 AL 30 DE ABRIL 2018”.

I. APLICACION DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LAIP).

Al respecto, se debe mencionar que el artículo 50 literales b), d), i) y j) de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), disponen que le corresponden al Oficial de Información realizar los trámites necesarios para la localización y entrega de la información solicitada por los particulares, así como resolver sobre las solicitudes de información y solicitud de datos personales que se sometan a su conocimiento. En consonancia, con el cuerpo legal antes citado, el art. 60 establece los presupuestos de admisibilidad que debe de cumplir el ciudadano al momento de requerir ante los Entes Obligados el cumplimiento de la entrega de la información de fondo y de forma. En ese sentido, a partir del deber de motivación establecido en el art. 65 y 72 de la LAIP, las decisiones de los entes obligados deberán entregarse por escrito a la persona solicitante, con mención breve pero suficiente de sus fundamentos.

Como consecuencia del principio de Legalidad enmarcado en los procedimientos administrativos previstos en los literales ya citados en el romano I de la presente Resolución, le corresponde al Oficial de Información recibir, dar trámite y resolver las solicitudes de acceso que dentro de sus competencias funcionales se sometan a su conocimiento. En tal perspectiva, como derivación del principio de máxima publicidad contemplado en la LAIP, se debe potenciar el acceso a la información pública cuando los particulares entablen sus pretensiones de conocimiento sobre los negocios públicos en cumplimiento de los requisitos de forma establecidos en la Ley.



II. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

En primer lugar, es necesario referirse en cuanto al derecho de acceso a la información en poder de las instituciones pública, para el cual la Sala de lo Constitucional, en la sentencia de 22 de agosto de 2014, inconstitucionalidad 43-2013, expresó que este posee la condición indiscutible de derecho fundamental, anclada en el reconocimiento constitucional del derecho a la libertad de expresión (art. 6 de la Cn.), el cual tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar y recibir informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público (sentencia de 24 de septiembre de 2010, inconstitucionalidad 91-2007), y en el principio democrático del Estado Republicano de Derecho (art. 85 de la Cn.), que impone a los poderes públicos el deber de garantizar la transparencia y la publicidad en la Administración, así como la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos y fondos públicos (sentencia de 25 de agosto de 2010, inconstitucionalidad 1-2010).

Bajo ese orden de ideas, la protección constitucional de la búsqueda y obtención de información se proyecta básicamente frente a los poderes públicos –órganos del Estado, sus dependencias, instituciones autónomas, municipalidades– y cualquier entidad, organismo o persona que administre recursos públicos o bienes del Estado o que en general ejecute actos de la Administración, pues existe un principio general de publicidad y transparencia de las actuaciones del Estado y la gestión de fondos públicos (sentencia de 1 de febrero de 2013, amparo 614-2010). Por tal razón, la Sala ha determinado que aquellos tienen la obligación de suministrar a las personas que les solicitan la información de interés público que tengan en su poder, de manera oportuna, completa y veraz, en igualdad de condiciones y mediante procedimientos rápidos, sencillos y expeditos (sentencia de 1 de septiembre de 2016, amparo 713-2015). Lo anterior, supone el directo cumplimiento al principio de máxima publicidad reconocido, además, en el artículo 4 LAIP por el cual, la información en poder de los entes obligados es pública y su difusión irrestricta, salvo las excepciones expresamente establecidas en la Ley.

Sin embargo, para que los particulares accedan a tal información es preciso que su solicitud se realice en la forma establecida en el artículo 66 LAIP, 45 de su reglamento. Así la falta de alguno de esos requisitos en la solicitud tiene como consecuencia que no se configure en debida forma la pretensión de acceso a la información en los términos que establece la Ley en la materia.

III. ANÁLISIS:

Que del análisis realizado a la pretensión del ciudadano se le aclara que el procedimiento de acceso a la información versa sobre la gestión de información dentro de un ente obligado; contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documente el ejercicio de sus funciones; por lo que esta vía no constituye un

medio idóneo para obtener valoraciones, pronunciamientos respuestas concretas u opiniones sobre cuestionamientos puntuales de los negocios públicos en la medida que ellos no contén un registro o documento dentro de esta institución; por otra parte, la solicitud carece de Documento de Identidad, así como el llenado del Formulario con su firma autógrafa, ya que es uno de los requisitos fundamentales del Art. 66 incisos 1° y 2° de la LAIP y el Art. 54 literal d) RELAIP.

No obstante, para que la ciudadana ejerza su derecho de acceso a la información, se le orienta de conformidad a las facultades señaladas en el Art. 50 literal c) de la LAIP, “Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientar sobre la dependencia o entidades que pudieran tener la información que solicita.” asimismo, el Art. 68 inciso 2° del mismo cuerpo legal indica que: *“Cuando una solicitud de información sea dirigida a un ente obligado distinto de lo competente, este deberá informar al interesado la entidad a la que debe dirigirse.”* y últimamente el Art. 49 del RELAIP, el cual señala: *“Las Unidades de Acceso a la Información Pública que reciban una solicitud de acceso a la información, deberán auxiliar y orientar a los particulares....”*

De todo lo expuesto, se le indica a la peticionaria la **Unidad Organizativa** facultada es la Unidad de Control de Documentos según el Manual de Descripción de Competencias y Comportamientos Versión 03 de diciembre 2015, tomo II, emitido por esta Corte de Cuentas de la Republica, corresponde a dicha unidad tramitar solicitudes de Constancias electorales, atender al público que solicita servicios de control de documentos, tramitar solicitudes de certificación de solvencia, entre otras para el caso que nos ocupa para dar respuesta a su requerimiento.

En ese sentido el Art. 74 literal b) de la LAIP expresa: *“Cuando la información se encuentre disponible públicamente. En este caso, deberán indicar al solicitante el lugar donde se encuentra la información.* Asimismo, el Art. 10 numeral 10 de la LAIP, establece: *Los entes obligados, de manera oficiosa pondrá a disposición del público, divulgara y actualizaran, en los termino de los lineamientos que expida el Instituto, la información siguiente: (...) 10. Los servicios que ofrecen, los lugares y horarios en que se brindan, los procedimientos ante cada ente obligado y sus correspondientes requisitos, formatos y plazos. Por lo que a la luz de este presupuesto la información requerida correspondiente a “formulario para solicitar solvencia de la Corte de Cuentas de la Republica.”, no se le dará tramite a su solicitud en vista que este se encuentra en el portal de transparencia en el siguiente link: <https://www.cortedecuentas.gob.sv/index.php/es/marco-normativo/certificacion-de-solvencias-de-finiquitos?download=5196:formato-a-l-solicitud-funcionario-o-empleado-publico>; Asimismo, se le brinda el correo para que pueda gestione lo solicitado: ctrlldoc@cortedecuentas.gob.sv y número de teléfono de la misma, 2592-8115 y 2592-8116*



Por todo lo antes expuesto, este Oficial de Información **RESUELVE:**

- a) **Declárese IMPROCEDENTE** la pretensión de la ciudadana [REDACTED] por las razones antes expuestas en romano III de la presente resolución.

Oriéntese al ciudadano, acudir **a la Unidad de Control de Documentos**, ubicada en el primer nivel del Edificio No. 1 de esta Corte en los horarios de atención al usuario de 8: a.m. a 12:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 4 pm, y números de teléfonos de la misma, **25-92 8115 y 25-92 8116** y correo electrónico ctrldoc@cortedecuentas.gob.sv.

- b) **Comuníquese** al mismo, en caso de no estar de acuerdo con la Resolución, le queda expedito su derecho de acudir ante el Instituto de Acceso a la Información Pública-IAIP- ó a este Departamento de Acceso a la Información Pública, tal como lo establecen los Arts. 132 y 134 de la Ley de Procedimientos Administrativos- LPA y 82, 83 y 84 LAIP.
- c) **Notifíquese** el presente auto, en el medio establecido para tales efectos.
- d) **Archívese**, la solicitud de Acceso a la Información Pública DAIP-129-2022


Lic. Álvaro Renato Huezo Melara
Jefe interino del Departamento de Acceso a la Información Pública y
Oficial de Información



//SMA